

Gaceta de



Puerto Rico

Year 1901—Office, 21, Allen St

Año 1901—Oficinas, calle Allen, 21

Official subscriptions	\$ 1.75 per month
Private	1.25 —
Single copy (date of issue).....	.10
— (old date).....	.20
Advertisements	10 per line

Subscripción oficial por un mes.....	\$ 1.75
Subscripción particular por un mes.....	1.25
Número suelto del día.....	.10
Número atrasado.....	.20
Anuncios la línea	10

Published daily except Mondays

Se publica diariamente menos los Lunes

Entered at the P. O. at San Juan P. R. as Second class matter.

Year 1902

San Juan Puerto-Rico, Thursday Enero 9th

No. 7

IMPORTANTE.

Ponemos en conocimiento de los Sres. que utilizan la "Gaceta de Puerto-Rico" para la publicación de Edictos judiciales, en asuntos de partes, que publicado por primera vez y no satisfecho su importe, se suspenderán las otras dos publicaciones.

Puerto-Rico, 9 de Octubre de 1901.

Sucesores de J. J. Acosta,
Proprietarios y Editores de la
"Gaceta de Puerto-Rico."

PARTE OFICIAL

Department of the Interior

BUREAU OF AGRICULTURE AND MINES.

NOTICE.

San Juan, P. R., January 6, 1902.

Mr. Manuel Martinez Mora, Public Surveyor, will proceed between the 21st and 25th instant to the inspection and location of eighteen mining pertenencias of gold, and other metals in district of Corozal, which have been registered in this bureau under number 180 with the name of "San Luis," on application of Mr. Henry D. Sayre.

Notice thereof is published in this official paper for information of all concerned, with the understanding that no other objections to the location than those which should be presented to the Surveyor at the time of its performance shall be considered.

Luis Cuevas de Zequeira,
Acting Chief Bureau of Agriculture
and Mines.

TRADUCCIÓN.

AVISO

San Juan, P. R., Enero 6 de 1902.

El Agrimensor público Don Manuel Martinez Mora procederá, del 21 al 25 del mes actual, al reconocimiento y demarcación de 18 pertenencias mineras de oro, y otros metales, radicadas en la jurisdicción de Corozal, las cuales han sido registradas en esta Oficina bajo el número 180 con el nombre de "San Luis," a solicitud de Mr. Henry D. Sayre.

Lo que se anuncia en el "Periódico oficial" para conocimiento de los interesados; advirtiéndose que no se tomarán en consideración otras reclamaciones contra la demarcación, sino aquellas que se hubiesen presentado al Agrimensor en el acto de verificarla.

Luis Cuevas de Zequeira,
Jefe interino de la Oficina de Agricultura
y Minas.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE PUERTO-RICO.

SENTENCIA.—En la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto-Rico á cinco de Noviembre de mil novecientos uno, en el recurso de casación por infracción de ley que ante Nos pende, interpuesto por la representación del procesado Don Gregorio Kullan

contra la sentencia pronunciada por el Tribunal del Distrito de Arecibo, en la causa seguida contra dicho procesado por el delito de injurias á la Autoridad.

Resultando que la referida sentencia, que fué dictada en juicio oral y público en cuatro de Junio último, contiene el siguiente resultando:

"Resultando probado que en nueve de Agosto último el acusado dirigió á la Suprema Corte de Justicia un escrito de su puño y letra, que dice así: "Don Gregorio Kullan, vecino de Arecibo, por el recurso de queja ó como más haya lugar en derecho, paso á denunciar á ese Supremo Tribunal los hechos siguientes: En los primeros dias del mes de Octubre del año pasado de mil ochocientos noventa y nueve interpusé reclamación verbal ante el Juzgado municipal de Manatí contra los hermanos Don Juan y Don Antonio Simó, sobre pago de una obligación de deber manco munada y solidaria, que venció el treinta de Junio anterior. Corridos los trámites recayó sentencia condenatoria contra los deudores, que se alzaron de ella para ante la Corte de Distrito que señaló para la comparecencia de la ley el día primero de Diciembre del mismo año, es decir, un mes y dias despues de la ascendencia de los autos al Superior. Sin concebir sospecha de que tal retardo en la Administración de Justicia fuese malicioso, acudí á la comparecencia en la que los deudores interesaron la nulidad de lo actuado, que fué decretada, mandando reponer los autos al estado de demanda. Sin embargo de conceptuar injusta la sentencia superior, por infringirse manifiestamente el artículo 243 de la ley procesal, devueltos los autos al inferior, gestioné la prosecución del juicio, que tramitado de nuevo, volvió á recaer sentencia condenatoria para los demandados, que también fué recurrida. Personado por los apelantes en el Superior el Abogado Don Elpidio de los Santos, se hizo el señalamiento para la vista, á la que no comparecieron aquéllos y el Tribunal, de oficio, volvió á declarar nulo lo actuado. Como en esta sentencia no sólo se infringien los preceptos terminantes de los artículos 582 y 735, en relación con el 495 de la ley de procedimientos civiles, disposición 73 de la Orden General número 118, de quince de Agosto próximo pasado, y se aplica indebidamente el artículo 1429, infringiéndose tambien el 279 de la enunciada ley, sino que se funda en el hecho falso de que el Juez municipal falló con un solo asociado, la reputé manifiestamente injusta y denuncié el hecho en el escrito que en copia acompañé al Mayor General Jefe del Departamento, que dispuso acudiera á la Autoridad correspondiente. Como el juicio es devolvió al inferior en estado de demanda, prosiguió su curso, volviendo el Juez municipal con sus asociados á condenar á los deudores á pagar la obligación legítimamente contraída, alzándose aquellos de la tercera sentencia, que corrió los mismos procedimientos de suerte de las anteriores. Abochornado de haber explorado los auxilios de los Tribunales de mi país al amparo de las leyes, para hacer efectiva una obligación de deber por cantidad determinada y á plazo fijo dentro de los estrechos moldes de un juicio verbal, por su naturaleza sumarisimo, sin resultado alguno, despues de ocho ó nueve meses de tramitación inútil, de costosos y frecuentes viajes, que me han irrogado perjuicios de consideración, viendo burlado mi reclamo y perdido mi dinero por el levantamiento ó nulidad decretada en la última sentencia del embargo preventivo que aseguraba el crédito y que se fundaba en la obligación que sirvió de base á la demanda, y en la que consta la certeza y legitimidad de la deuda, sin que el celoso y recto Tribunal se fijara en la cadena no interrumpida de crímenes que en mi humilde sentir se desprenden del contesto literal de las diligencias del citado embargo preventivo, suspendí el ejercicio de la acción civil y denuncié al mismo Tribunal los delitos en mi concepto perpetrados por los deudores y co-reos. Decidido á exigir responsabilidad civil y criminal á estos Jueces, insté la expedición de los oportunos testimonios al mismo Tribunal, que proveyó de conformidad en cuanto á las constancias del rollo del juicio, man-

dándome acudir á donde correspondía por los demás antecedentes: lo hice al Tribunal municipal de Manatí, y cuando procuré el testimonio, se me contestó que el expediente había sido elevado á la Corte de Distrito, en cumplimiento de una carta-orden. Con este motivo produje nuevo escrito al citado Superior Tribunal y á esta fecha no se ha notificado resolución alguna referente á dicha solicitud. Tan incorrecto proceder por parte de la Corte del Distrito de Arecibo, tanto en la esfera civil infringiendo la Ley y Ordenes Generales vigentes, retardando indebidamente el despacho en los asuntos inherente á sus sagrados deberes y negando hasta ahora la expedición de los testimonios solicitados, cuanto en la esfera criminal, en que el proceso que originó mi denuncia marcha como el enfermo atacado de la lenta calentura de la tisis, ha traído á mi ánimo el desencanto más amargo, cuando acariciaba la idea de que con el cambio de nacionalidad había llegado el momento en mi país de la reivindicación de la justicia, porque su administración se confiaba á Jueces puertorriqueños. Por desgracia, una dolorosa experiencia demuestra hasta la saciedad que aún puede una tarjeta de recomendación decidir del patrimonio de un litigante que, víctima de la tiranía de la ley, que en los juicios verbales no dá ulterior recurso contra las sentencias de segunda instancia, no le queda más remedio que recitar en silencio una larga letanía de lamentos y desengaños, porque si bien esa misma ley le abre la puerta para exigir á los Jueces injustos ó prevaricadores la responsabilidad judicial consiguiente, este derecho es siempre ilusorio al chocar con las leyes de un mal entendido compañerismo, por ser condición indispensable la dirección de Letrado en semejante recurso. Es por demás chocante ver á un letrado personándose siempre por los deudores apelantes, sin concurrir á las vistas públicas á defender sus derechos, hecho que aparea por sí solo la aceptación de las actuaciones, y el Tribunal de oficio declarándolas nulas sin instigación de parte alguna en cuanto á lo civil, pero guardando un cauteloso silencio en lo referente á los hechos punibles, que salen á flor de agua de ese torrente fangoso de inmoraldad que surge de las páginas del incidente de embargo preventivo, declarado últimamente también nulo. ¿Será por qué los que aparecen responsables de esos hechos visten levitas? No lo creo, porque la ley penal no establece gerarquía entre los criminales; pero ello es lo cierto que los deudores han vendido fraudulentamente y simuladamente sus bienes para estafarme, después de haber ganado una sentencia condenatoria en su contra, venta que consumaron en primero de Noviembre último, fecha por demás sospechosa al señalar la Corte de Arecibo, para resolver el recurso pendiente desde Octubre, el primero de Diciembre pasado; y es lo cierto tambien que, implorando el auxilio de los Tribunales puertorriqueños y al amparo de las leyes vigentes, no solo he perdido la deuda y una tercera parte más en viajes y costas, sino que los autores, cómplices y encubridores de hechos tan vergonzosos disfrutaron de la mayor impunidad. Si tales hechos y otros de idéntica ó peor índole, toman carta de naturaleza en nuestra administración de justicia, cuyo limpio espejo nadie se había atrevido á empañar todavía. Si las leyes y Ordenes Generales vigentes resultan letra muerta para los encargados de su custodia y cumplimiento ¿quién garantizaría los derechos de los ciudadanos? ¿á qué Tribunal habrían de recurrir en demanda de justicia? ¿á aquéllos que previendo tal vez las consecuencias de sus actos, concientes ó inconscientes, niegan ó retardan la expedición de los antecedentes que han de ponerles en evidencia ante su Superior gerárquico? No; preferible es la renuncia de todo derecho á la reconocida ilustración y rectitud de esa Suprema Corte de Justicia someto la calificación de los hechos á que me he contraído, abrigando la esperanza de que si fueren punibles, habrá de acordar su averiguación y castigo de los que resultaren sus autores. Arecibo, Agosto nueve de mil novecientos. Muy respetuosamente, Gregorio Kullan."

Resultando que las frases contenidas en dicho